**DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE
DERECHO DE FAMILIA: UN ANÁLISIS DE LOS
INTRUMENTOS INTERRELACIONADOS EN LA UE^{1*}**

AGNÈ LIMANTÈ

Investigadora responsable del Instituto de Derecho
del Centro de Ciencias Sociales de Lituania

E-mail: agne.limante@gmail.com

RESUMEN: Este capítulo analiza el sistema del Derecho internacional privado de familia de la UE, tratando de trazar un mapa de los instrumentos aplicables y de aclarar los vínculos entre ellos. Este capítulo definirá el ámbito de aplicación de cada instrumento y su lugar en la red interconectada. Este análisis servirá de base para comprender mejor la ubicación del Reglamento sobre el patrimonio matrimonial y del Reglamento sobre las consecuencias patrimoniales de las uniones registradas en el sistema general del Derecho de familia internacional privado europeo y la conexión de estos reglamentos con otros instrumentos.

Palabras clave: Derecho internacional privado de familia de la UE, parejas transfronterizas, Reglamento Bruselas II bis, Reglamento Roma III, Reglamento de alimentos, Reglamento sobre el régimen económico matrimonial, Reglamento sobre los efectos patrimoniales de las uniones registradas.

ABSTRACT: This chapter analyses the system of EU private international family law, seeking to draw a map of the applicable instruments and to clarify the links between them. This chapter will define the scope of each instrument and its place within the interconnected network. This analysis will thus serve as a basis for a better understanding of the location of the Matrimonial Property Regulation and the Regulation on the Property Consequences of Registered Partnerships within the overall system of the European private international family law and the connection of these regulations to other instruments.

Keywords: EU private international family law, cross-border couples, Regulation Brussels II bis, Rome III regulation, Maintenance Regulation, Matrimonial Property Regulation, Regulation on the Property Consequences of Registered Partnerships.

1 * Traducido por María José Cazorla González. Profesora Titular de Derecho civil de la Universidad de Almería.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. INSTRUMENTOS EUROPEOS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE FAMILIA. III. INSTRUMENTOS DE LA UE APLICABLES A LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL. 3.1. Reglamento Bruselas II bis. 3.2. Reglamento Roma III. IV. INSTRUMENTOS APLICABLES A LA RESPONSABILIDAD PARENTAL. 4.1 Reglamento Bruselas II Bis. 4.2 Instrumento de ratificación del convenio de La Haya de 1996 en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. 4.3 Convenio de La Haya de 1980 sobre la sustracción de menores. V. REGULACIÓN DE LOS ASPECTOS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS. 5.1 Reglamento de alimentos. 5.2 convenio de la Haya sobre alimentos para niños de 2007. 5.3. Protocolo de alimentos de La Haya de 2007. VI. REGULACIÓN DE LOS BIENES MATRIMONIALES Y LOS BIENES DE LAS PAREJAS REGISTRADAS. 6.1. Reglamento sobre el régimen económico matrimonial. 6.2. Reglamento sobre los efectos patrimoniales de las uniones registradas. VII. ESTUDIO DE CASO: INTERACCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS. VIII. OBSERVACIONES FINALES.

I. INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, el Derecho internacional privado había sido una cuestión de derecho nacional en la que cada Estado europeo tenía sus propias normas para tratar la jurisdicción, el derecho aplicable y el reconocimiento y la ejecución de las sentencias extranjeras. Sin embargo, en la UE, caracterizada por el espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que se garantiza la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales, pronto se hizo evidente la necesidad de una solución común para tratar los casos intracomunitarios, dejando que las normas nacionales de Derecho internacional privado regularan las situaciones relativas a terceros países o complementaran las leyes de la UE.

A raíz del Tratado de Ámsterdam², que entró en vigor el 1 de mayo de 1999, la UE adquirió su propia competencia legislativa en el ámbito del Derecho internacional privado. Esta fue la fecha de inicio del desarrollo de las normas europeas en este ámbito. Desde la adopción del Tratado de Lisboa³ (1 de diciembre de 2009), las normas de armonización de conflictos se regían en él por el Título V (artículos 67 a 89) de la Parte III del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).⁴

Los artículos 67 y 81 del TFUE son especialmente relevantes en relación con este capítulo. El artículo 67, apartado 4, del TFUE declara que la UE debe facilitar el acceso a la justicia, en particular mediante el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil. El artículo 81 obliga a la UE a desarrollar la cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, basada en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales. También especifica que dicha cooperación puede incluir la adopción de medidas para la aproximación de las leyes y reglamentos de los Estados miembros.

El artículo 81, apartado 3, del TFUE, que sirve de base jurídica para los instrumentos de la UE en el ámbito del Derecho de familia, especifica que las medidas relativas al Derecho de familia con repercusiones transfronterizas serán establecidas por el Consejo, que actuará con arreglo a un procedimiento legislativo especial, en virtud del cual el Consejo se pronunciará por unanimidad tras consultar al Parlamento Europeo. Además,

2 Tratado de Amsterdam reformado por el Tratado de la Unión Europea y los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conectados [1997] OJ C 340..

3 Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa [2007] OJ C 306.

4 ³ Version consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea [2012] OJ C 326.

una medida no se adoptará cuando los Parlamentos nacionales se opongan a ella. Este procedimiento permite a los Estados miembros mantener el control sobre las medidas que adopta la UE y les permite oponerse al instrumento si se trata de asuntos delicados. Tras recibir la competencia para actuar, en las dos últimas décadas la UE ha adoptado una serie de instrumentos de Derecho internacional privado destinados a abordar las cuestiones derivadas de los movimientos transfronterizos de las familias. Además, varios instrumentos adoptados por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado son directamente aplicables en la UE.⁵ El conjunto de estos instrumentos suele denominarse Derecho de familia privado europeo. Abarcan tres tipos de cuestiones que tradicionalmente se distinguen en el Derecho internacional privado: (i) qué tribunal es competente para tratar un caso con un elemento internacional (“competencia”); (ii) qué ley debe aplicarse al caso (“elección de la ley”); y (iii) en qué condiciones puede reconocerse y ejecutarse una sentencia en otro Estado (“reconocimiento y ejecución”).

La existencia de una normativa comunitaria unificada, en lugar de depender únicamente de los sistemas nacionales, presenta varias ventajas. La “europeización” de las normas de elección de la ley en el Derecho de familia aumenta la seguridad jurídica y la previsibilidad, ya que sin analizar las normas nacionales está claro qué instrumento (la normativa de la UE) se aplica y dicho instrumento es fácilmente accesible. Además, la unificación garantiza una mejor protección de las expectativas legítimas; al menos en cierta medida, limita el *forum shopping* y ahorra costes a las partes. Por último, las normas europeas garantizan la sencilla circulación transfronteriza de las resoluciones judiciales, ya que el reconocimiento y la ejecución son automáticos o se simplifican.⁶

Este capítulo analiza el sistema del Derecho internacional privado de familia de la UE, tratando de trazar un mapa de los instrumentos aplicables y de aclarar los vínculos entre ellos. Este capítulo definirá el ámbito de aplicación de cada instrumento y su lugar en la red interconectada. Este análisis servirá de base para comprender mejor la ubicación del Reglamento sobre el patrimonio matrimonial y del Reglamento sobre las consecuencias patrimoniales de las uniones registradas en el sistema general del Derecho de familia internacional privado europeo y la conexión de estos reglamentos con otros instrumentos.

II. INSTRUMENTOS EUROPEOS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE FAMILIA

De todos los instrumentos de la UE, los más importantes en el ámbito del Derecho de familia son el Reglamento Bruselas II bis por el que se establece la competencia judicial en materia matrimonial y de responsabilidad parental⁷ (la versión refundida se aplicará a

5 La Conferencia de La Haya es la Organización Mundial para la Cooperación Transfronteriza en Materia Civil y Comercial. La Unión Europea se convirtió en miembro de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado el 3 de abril de 2007.

6 Sobre los fines y objetivos del Derecho internacional de familia europeo, véase N.A. BAARSMA, *The Europeanisation of International Family Law*, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2011, pp. 270–273.

7 Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000 [2003] OJ L 338.

partir de agosto de 2022⁸), el Reglamento Roma III⁹ por el que se establecen las normas relativas a la elección de la ley aplicable al divorcio, el Reglamento sobre alimentos¹⁰, el Reglamento sobre la propiedad matrimonial¹¹ y el Reglamento sobre las consecuencias patrimoniales de las uniones registradas¹².¹³ Esta lista se ve ampliada por los instrumentos adoptados en el marco de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, en particular por el Convenio de La Haya de 1980 sobre sustracción de menores¹⁴, el Convenio de La Haya de 1996¹⁵, el Convenio de La Haya de 2007 sobre alimentos¹⁶ y el Protocolo de La Haya de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimentarias.¹⁷

Cabe señalar que los instrumentos de la UE adoptados en el ámbito del Derecho de familia internacional privado varían no sólo en cuanto a los temas que abarcan, sino también por el alcance de las normas que incluyen. Algunos instrumentos son “completos” y, como tales, incluyen normas sobre competencia, ley aplicable y reconocimiento y ejecución. Tales son el Reglamento sobre alimentos, el Reglamento sobre sucesiones, el Reglamento sobre bienes matrimoniales y el Reglamento sobre las consecuencias patrimoniales de las uniones registradas. Los demás instrumentos sólo cubren una parte de las normas de conflicto de leyes (competencia, reconocimiento y ejecución o ley aplicable). Se trata, por ejemplo, del Reglamento Bruselas II bis y del Reglamento Roma III, que se centran, respectivamente, en la competencia, el reconocimiento y la ejecución (Reglamento Bruselas II bis) y la ley aplicable (Reglamento Roma III) en los asuntos matrimoniales.

Existen, naturalmente, ciertos rasgos comunes entre todos los instrumentos de conexión mencionados. En primer lugar, ya se trate de las normas de competencia o de las normas de ley aplicable, los factores de conexión tratarán de remitirse al foro / ley del Estado con el que el caso esté más estrechamente relacionado. Por lo tanto, en el caso de la ley aplicable, la *lex fori* rara vez será la opción o la posibilidad de optar por ella. Por lo tanto, en el caso de la ley aplicable, la *lex fori* rara vez será la opción o la posibilidad de optar por la *lex fori* estará vinculada al hecho de que las normas jurisdiccionales se

- 8 Council Regulation (EU) 2019/1111 of 25 June 2019 on jurisdiction, the recognition and enforcement of decisions in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, and on international child abduction [2019] OJ L 178.
- 9 Council Regulation (EU) No 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation, OJ L 343, p. 10–16.
- 10 Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations [2009] OJ L 7.
- 11 Council Regulation (EU) 2016/1103 of 24 June 2016 implementing enhanced cooperation in the area of jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes [2016] OJ L 183.
- 12 Council Regulation (EU) 2016/1104 of 24 June 2016 implementing enhanced cooperation in the area of jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of the property consequences of registered partnerships [2016] OJ L 183.
- 13 El Reglamento sobre sucesiones no forma parte, en sentido estricto, del Derecho internacional privado de familia de la UE, pero está muy relacionado con él. No se analizará con más detalle en este capítulo. Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession [2012] OJ L 201.
- 14 Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction.
- 15 Hague Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Cooperation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children.
- 16 Hague Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance.
- 17 Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations.

fijaron para establecer el foro de un Estado con el que existe una estrecha conexión.¹⁸ En segundo lugar, en todos los instrumentos, la residencia habitual es el principal factor de conexión. Aunque se tiene en cuenta la nacionalidad, la residencia habitual suele ocupar una posición más importante. Esto, junto con el principio de universalidad, significa que, por ejemplo, el Reglamento Bruselas II bis se aplica no sólo a los ciudadanos de la UE, sino también a los nacionales de terceros países que residen habitualmente en la UE. Además, las normas europeas de elección de la ley en el ámbito del Derecho de familia excluyen la aplicación del reenvío, es decir, las normas de elección de la ley se refieren únicamente a las normas sustantivas de la ley aplicable. No se hace referencia a las normas extranjeras de elección de la ley, lo que excluye el “rebote” entre jurisdicciones. Esto refuerza la previsibilidad y simplifica la planificación del procedimiento. Por último, en mayor o menor medida, los instrumentos de Derecho internacional privado de familia de la UE incorporan cada vez más normas sobre la autonomía de la voluntad.¹⁹

Todos los instrumentos de Derecho de familia de la UE están fuertemente interrelacionados y en muchos casos se aplican conjuntamente, ya que sus ámbitos de regulación se complementan entre sí. No es una tarea fácil, ya que la lista de instrumentos es realmente larga y puede ser necesario consultar varios de ellos en un caso de familia.

Para complicar aún más la aplicación de los instrumentos enumerados anteriormente, cabe mencionar que no todos los Estados miembros de la UE participan en las normas de Derecho de familia internacional privado. En primer lugar, Dinamarca ha optado por no participar en la normativa de la UE en materia de Derecho de familia.²⁰ En segundo lugar, una consideración importante es que, como se ha señalado anteriormente, la adopción de la legislación de la UE sobre una cuestión de Derecho internacional privado relativa al Derecho de familia vuelve a requerir la acción unánime del Consejo (artículo 81, apartado 3, del TFUE). Sin embargo, esta unanimidad suele ser difícil de conseguir. Teniendo esto en cuenta, el Tratado de Lisboa impulsó la creación de una “Europa de varias velocidades” al establecer el procedimiento de cooperación reforzada. Cuando el requisito de la unanimidad en el Consejo hizo que varios reglamentos quedaran fuera del procedimiento ordinario, varios Estados miembros de la UE decidieron proceder mediante la cooperación reforzada. Como resultado del Reglamento Roma III, el Reglamento sobre los bienes matrimoniales y el Reglamento sobre las consecuencias patrimoniales de las uniones registradas se aplican únicamente a los Estados miembros que participan en la cooperación reforzada. Todo ello da lugar a una normativa entrelazada, bien elaborada y muy desarrollada, pero a menudo no tan fácil de entender y aplicar.

18 Como señala Baarsma, además de los objetivos generales de previsibilidad y seguridad jurídica, el principio de la conexión más estrecha garantiza que los sistemas jurídicos implicados puedan aplicarse de forma igualitaria y uniforme. Este aspecto es de gran importancia en la Unión Europea, en la que el principio de reconocimiento mutuo presupone una equivalencia de las normas jurídicas de los Estados miembros. N.A. BAARSMA, *The Europeanisation of International Family Law*, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2011, p. 292.

19 See A. LIMANTE, N. POGORELČNIK VOGRINC, ‘Party Autonomy in the Context of Jurisdictional and Choice of Law Rules of Matrimonial Property Regulation’ (2020) *Baltic Journal of Law & Politics*, Vol. 13(2), 135-158; L. WALKER, ‘Party Autonomy, Inconsistency and the Specific Characteristics of Family Law in the EU’ (2018) *Journal of Private International Law*, Vol. 14(2), 225-261; F. MAULTZSCH, ‘Party Autonomy in European Private International Law: Uniform Principle or Context-Dependent Instrument?’ (2016) *Journal of Private International Law*, Vol. 12(3), 466-491; I. VIARENGO, ‘Choice of Law Agreements in Property Regimes, Divorce, and Succession: Stress-testing the New EU Regulations’, *ERA Forum* 17 (2016).

20 Protocol (No 21) On the Position of The United Kingdom and Ireland in Respect of the Area of Freedom, Security And Justice [2016] OJ C 202; Protocol (No 22) on the position of Denmark. [2012] OJ C 326.

En las secciones siguientes se analizan los principales instrumentos de Derecho de familia internacional privado aplicados en la UE, clasificándolos en el ámbito del Derecho de familia que abarcan. El capítulo no pretende discutir el contenido de los instrumentos en detalle. En cambio, se centra en sus principales características y en los vínculos entre los distintos instrumentos de Derecho de familia internacional privado de la UE.

III. INSTRUMENTOS DE LA UE APLICABLES A LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL

Si un caso de disolución del vínculo matrimonial llega a un tribunal de un Estado miembro de la UE y la situación tiene un elemento transfronterizo (los cónyuges son de distinta nacionalidad o viven en jurisdicciones distintas a la de su nacionalidad), habrá que aplicar dos reglamentos de la UE: el Reglamento Bruselas II bis y el Reglamento Roma III. Esto se debe a que el Reglamento Bruselas II bis sólo establece normas relativas a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones en materia de responsabilidad parental, pero no contiene normas sobre la ley aplicable. Las normas sobre la ley aplicable al divorcio se establecen, pues, en el Reglamento Roma III, que se adoptó mediante el procedimiento de cooperación reforzada.

Hay que tener en cuenta que la legislación de la UE no ofrece ninguna definición de “matrimonio”, ya que no existe un acuerdo común sobre esta institución entre los países de la UE (en particular, debido al diferente enfoque de los Estados miembros con respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo).²¹ Por lo tanto, cada Estado miembro aplica el Reglamento Bruselas II bis, el Reglamento Roma III y otros instrumentos que emplean la noción de matrimonio prevista en su propio ordenamiento jurídico.

Divorcio / Separación legal			
Instrumentos jurídicos de Derecho internacional privado de familia	Ambitos	Ámbito temporal de aplicación	Ámbito geográfico de aplicación
Reglamento Bruselas II bis /instrumento de la UE	Jurisdicción Reconocimiento y ejecución Cooperación	Aplicable a partir del 1 de marzo de 2005 (versión refundida que se aplicará a partir de agosto de 2022)	Todos los Estados miembros de la UE, excepto Dinamarca
Reglamento Roma III /Instrumento de la UE	Derecho aplicable	Aplicable a partir del 21 de junio de 2012	Cooperación reforzada 17 Estados miembros

21 Sobre la comprensión del matrimonio en Europa, véase C. SÖRGJERD, ‘Marriage in a European perspective’, in J. M. SCHERPE, *European Family Law Volume III*, Elgar, 2016, pp. 3-40.

3.1. Reglamento Bruselas II bis

El Reglamento Bruselas II bis establece las normas que rigen la competencia, el reconocimiento y la ejecución en los casos matrimoniales en la UE. Sólo se refiere a la disolución de los vínculos matrimoniales (divorcio, nulidad y separación legal), pero no incluye cuestiones accesorias, como los alimentos o las consecuencias patrimoniales del matrimonio. Sin embargo, las cuestiones de responsabilidad parental que suelen surgir en relación con el divorcio (custodia, acceso, derechos de visita) están cubiertas por este instrumento (que se trata en la sección 4.1. más adelante).

El Reglamento establece normas de competencia que determinan el Estado miembro en el que puede iniciarse un procedimiento de disolución del vínculo matrimonial. Sin embargo, es importante señalar que el Reglamento sólo se refiere a la competencia internacional, es decir, a la identificación de un Estado miembro concreto de la UE, y no a un tribunal concreto dentro del Estado. Esta última cuestión se deja para las normas nacionales del Estado en cuestión.

En general, el Reglamento Bruselas II bis cubre todos los casos de divorcio con un elemento transfronterizo. La única situación en la que el Reglamento no será aplicable y se aplicarán en su lugar las normas nacionales de elección de la ley, es cuando el caso se refiere a cónyuges que son ambos nacionales de terceros países con residencia habitual en un tercer Estado. Si al menos uno de los cónyuges es nacional de la UE o tiene su residencia habitual en un Estado de la UE, el Reglamento entrará en juego. Esto significa que los criterios de conexión expresamente establecidos en el reglamento se utilizarán para establecer la jurisdicción. Sin embargo, en determinados casos en los que ningún tribunal de la UE sea competente de acuerdo con las normas del Reglamento Bruselas II bis, el Reglamento permite establecer la competencia con arreglo a las normas nacionales (competencia residual).²²

Los motivos para determinar la jurisdicción se basan en el principio de una conexión objetiva entre uno o ambos cónyuges y el Estado del foro. Los dos criterios principales para establecer dicha conexión son la residencia habitual²³ de uno o ambos cónyuges y la nacionalidad común, que deben evaluarse en el momento de iniciar el procedimiento. En total, el artículo 3(1) establece 7 motivos de competencia: 6 motivos basados en la residencia habitual y uno - en la nacionalidad común de los cónyuges. Los siete motivos tienen el mismo valor y corresponde al demandante elegir cuál de las jurisdicciones disponibles es la mejor para iniciar un caso de disolución del matrimonio.²⁴ Dado que hay

22 Si ningún tribunal de un Estado miembro de la UE es competente en virtud de los artículos 3 a 5, se aplica el artículo 7 del Reglamento Bruselas II bis (competencia residual). En tal caso, el reglamento remite a las leyes nacionales. Esto fue confirmado por el TJUE in *Sundelind Lopez* case. Case C-68/07, *Sundelind Lopez*, ECLI:EU:C:2007:740.

23 Sobre el concepto de residencia habitual, véase Case C523/07, *A*, EU:C:2009:225; Case C-497/10, *Mercredi*, EU:C:2010:829; Case C376/14, *C*, EU:C:2014:2268; Case C499/15, *W and V*, EU:C:2017:118; Case C111/17, *OL v PQ*, EU:C:2017:436; Case C512/17, *HR*, EU:C:2018:513; Case C393/18, *UD v XB*, EU:C:2018:835. See also T. KRUGER, 'Finding a Habitual Residence' in I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *Planning the Future of Cross Border Families: A Path Through Coordination*, Hart Publishing, 2020; A. LIMANTE, 'Establishing Habitual Residence of Adults under the Brussels IIa Regulation: Best Practices from National Case-law' (2018) *Journal of Private International Law*, 14:1, 160-181; M-Ph. WELLER, B. RENTSCH, 'Habitual Residence': A Plea for 'Settled Intention' in: S. LEIBLE (ed.), *General Principles of European Private International Law*, Wolters Kluwer, 2016.

24 Véase a este respecto C. RICCI 'Jurisdiction in Matrimonial Matters' in C. HONORATI (ed.), *Jurisdiction in Matrimonial Matters, Parental Responsibility and International Abduction. A Handbook on the Application of*

varios criterios de competencia disponibles, puede ocurrir que los tribunales de más de un Estado miembro sean competentes en el mismo caso. La cuestión de los posibles procedimientos paralelos se aborda mediante la norma de litispendencia establecida en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento de Bruselas II bis.

El Estado de la UE en el que se iniciará el proceso de divorcio es importante por varias razones, como un lugar más “cómodo” para el solicitante o un Estado en el que se habla la lengua materna del mismo, por ejemplo. Sin embargo, también es importante porque el establecimiento de la jurisdicción para el divorcio en un determinado estado podría dar lugar a la atracción de la jurisdicción para cuestiones vinculadas. Por ejemplo, la norma general sobre la competencia establecida en el artículo 5 del Reglamento sobre el régimen económico matrimonial vincula la competencia en los procedimientos de divorcio y la competencia en materia de bienes matrimoniales (en algunos casos, se requiere el consentimiento de los cónyuges para limitar los beneficios de una precipitación a los tribunales. Además, el foro de un caso de divorcio también influye en la ley aplicable, especialmente en los Estados miembros de la UE donde no se aplica el Reglamento Roma III.²⁵

3.2. Reglamento Roma III

El Reglamento Roma III fue el primer instrumento europeo de Derecho internacional privado de familia adoptado mediante un procedimiento de cooperación reforzada. Su propuesta inicial se presentó en 2006, pero en 2008 el Consejo de la UE señaló que no se había obtenido la unanimidad y que dificultades insuperables impedían la unanimidad entonces y también en un futuro previsible. Como algunos de los Estados miembros de la UE seguían dispuestos a cooperar en esta cuestión, en julio de 2010 el Consejo autorizó una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y la separación judicial. Esto dio lugar a la adopción del Reglamento Roma III el 20 de diciembre de 2010. Como se indica en el cuadro anterior, 17 Estados miembros²⁶ participan ahora en la cooperación reforzada.

El ámbito de aplicación del Reglamento Roma III es claramente limitado: sólo se aplica a la disolución o a la relajación de los vínculos matrimoniales. Por lo tanto, la ley determinada por las normas de conflicto de leyes de este reglamento se aplica a las causas de divorcio y separación legal. No abarca cuestiones preliminares como la capacidad jurídica y la validez del matrimonio, ni asuntos como los efectos del divorcio o la separación judicial sobre los bienes, el nombre, la responsabilidad parental, las obligaciones de alimentos o cualquier otra medida accesorio (considerando 10 del Reglamento Roma III). Para estas cuestiones deben consultarse otros reglamentos de la UE o leyes nacionales.

El principal factor de conexión para establecer la ley aplicable según el Reglamento Roma III es la elección de las partes. En virtud del artículo 5 del Reglamento Roma

Brussels IIa Regulation in National Courts, Peter Lang, 2017.

25 Como señala Kruger, tener la posibilidad de elegir la jurisdicción significa que las partes tienen la opción de presentar sus peticiones de divorcio a varios sistemas jurídicos, y seleccionan el que prefieren bien porque el tribunal aplicaría la *lex fori*, bien porque saben qué factores de conexión utilizaría el tribunal para determinar la ley aplicable. Th. KRUGER, ‘Rome III and Parties’ Choice’, *Familie & Recht*, January 2014, DOI: 10.5553/FenR/.000013.

26 Austria, Belgium, Bulgaria, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovenia, Spain and Romania.

III, las partes que redactan un acuerdo sobre la ley aplicable a su divorcio o separación judicial pueden elegir la ley aplicable entre cuatro opciones posibles (tres opciones incluyen las leyes de los Estados con los que las partes tienen una conexión especial a través de la residencia habitual o la nacionalidad; la cuarta opción es la ley del foro). Si no se elige la ley, el artículo 8 prevé una cascada de factores de conexión. Ya sea la ley elegida por las partes o la ley aplicable en virtud del artículo 8, debido al principio de aplicación universal (artículo 4 del Reglamento Roma III), la ley de cualquier país del mundo, y no sólo la de los Estados miembros que participan en el Reglamento Roma III, puede ser aplicable en virtud del reglamento. La aplicación de la *lex fori* sólo es posible cuando la ley establecida en virtud del Reglamento no concede a uno de los cónyuges el mismo acceso al divorcio o a la separación judicial (artículo 10 del Reglamento Roma III²⁷).

Al abarcar la ley aplicable a la disolución o la relajación de los vínculos matrimoniales, el Reglamento Roma III completa las normas de competencia del Reglamento Bruselas II bis. Por lo tanto, estos instrumentos van juntos en los casos de disolución del matrimonio. De hecho, uno de los argumentos para la adopción del Reglamento Roma III fue la necesidad de limitar el posible *forum shopping*.²⁸ Como se ha comentado en la sección 3.1. del capítulo, el artículo 3 del Reglamento de Bruselas II bis prevé numerosos criterios de competencia alternativos. El solicitante tiene así la posibilidad de elegir el tribunal según consideraciones de fondo basadas en el resultado deseado en cuanto al mérito. Combinado con la norma de litispendencia del artículo 19 del Reglamento Bruselas II bis, que da prioridad al tribunal al que se acude en primer lugar, el marco jurídico ha provocado una carrera hacia los tribunales. Tras la adopción del Reglamento Roma III, acudir a los tribunales para elegir una de las jurisdicciones disponibles en virtud del artículo 3 del Reglamento Bruselas II ofrece pocas ventajas en cuanto a la ley aplicable al divorcio, ya que la ley aplicable se establecerá sobre la base del Reglamento Roma III en todos los países que participen en la cooperación reforzada.²⁹

IV. INSTRUMENTOS APLICABLES A LA RESPONSABILIDAD PARENTAL

Además de las cuestiones matrimoniales tratadas en la sección 3 de este capítulo, el Reglamento de Bruselas II bis también se ocupa de la competencia y las resoluciones judiciales en materia de responsabilidad parental de los hijos. Sin embargo, al igual que en los casos de divorcio, el Reglamento Bruselas II bis sólo establece normas relativas a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones en materia de responsabilidad parental. No contiene normas sobre la ley aplicable. En cambio, en el ámbito del divorcio, la ley aplicable no está regulada por otro instrumento de la UE, sino por un instrumento

27 Sobre la interpretación del artículo 10 del Reglamento Roma III, véase Case C249/19, *JE v KF*, ECLI:EU:C:2020:570.

28 Como se indica en el Reglamento Roma III, se crea un marco jurídico claro y completo en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial en los Estados miembros participantes, proporcionar a los ciudadanos resultados adecuados en términos de seguridad jurídica, previsibilidad y flexibilidad, y evitar que se produzca una situación en la que uno de los cónyuges solicite el divorcio antes de que lo haga el otro para asegurarse de que el procedimiento se rige por una ley determinada que considera más favorable a sus propios intereses (considerando 9).

29 S. CORNELOUP, 'Introduction' in S. CORNELOUP (ed), *The Rome III Regulation. A Commentary on the Law Applicable to Divorce and Legal Separation*, Elgar, 2020, p. 8.

jurídico internacional: el Convenio de La Haya de 1996 sobre Responsabilidad Parental y Protección de los Niños (todos los Estados miembros de la UE son Estados contratantes). En los casos en que se alega la sustracción de menores, se aplica el Convenio de La Haya de 1980 sobre sustracción de menores junto con el Reglamento Bruselas II bis.

La responsabilidad parental ¿La importancia de la responsabilidad parental?			
Instrumento de Derecho internacional privado de familia	Cuestiones tratadas	Ámbito temporal de aplicación	Ámbito geográfico de aplicación
Reglamento Bruselas II bis /instrumento de la UE	Jurisdicción Reconocimiento y ejecución Cooperación entre autoridades centrales Normas específicas sobre la sustracción de menores y el derecho de visita	Aplicable a partir del 1 de marzo de 2005 (la versión refundida se aplicará a partir del 1 de agosto de 2022)	Todos los Estados miembros de la UE, excepto Dinamarca
Convenio de La Haya de 1996 sobre la responsabilidad parental y la protección de los niños /adoptado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado	Derecho aplicable	La UE autorizó a los Estados miembros a adherirse al Convenio en 2002. ³⁰ Ratificaron el Convenio en diferentes momentos	Todos los Estados miembros de la UE
Convenio de La Haya de 1980 sobre la sustracción de menores/adoptado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado	Normas específicas sobre la sustracción de menores y el derecho de visita	Todos los Estados miembros de la UE ratificaron el Convenio en diferentes momentos	Todos los Estados miembros de la UE

4.1. Reglamento Bruselas II bis

Como se ha señalado anteriormente, el Reglamento Bruselas II bis establece, *inter alia*, normas de competencia en materia de responsabilidad parental. La “responsabilidad pa-

30 Decisión del Consejo 2003/93/EC de 19 Diciembre 2002 authorising the Member States, in the interest of the Community, to sign the 1996 Hague Convention on jurisdiction, applicable law, recognition, enforcement and cooperation in respect of parental responsibility and measures for the protection of children [2003] OJ L 48.

rental” se define de forma amplia e incluye todos los derechos y deberes relativos a la persona o los bienes de un niño que se otorgan a una persona física o jurídica por sentencia, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos.³¹

Según las normas del Reglamento Bruselas II bis, la competencia en los casos de responsabilidad parental corresponde a los tribunales del Estado de residencia habitual del menor (artículo 8).³² Las excepciones a esta norma se recogen en los artículos 9, 10³³, 12 y 13 del Reglamento Bruselas II bis.

Lo que es más importante, dado que la competencia en materia de divorcio y la competencia en materia de responsabilidad parental se analizan por separado, esto podría significar que los tribunales de diferentes Estados miembros sean competentes en ambas materias. Sin embargo, los alimentos para los hijos (véase la sección 5.1.) se evalúan en muchos casos junto con el caso de responsabilidad parental, ya que los Reglamentos sobre alimentos vinculan estos casos.

4.2. Instrumento de ratificación del convenio de La Haya de 1996 en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños

El Convenio de La Haya de 1996 pretende dar protección internacional a los niños de hasta 18 años. Regula la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y las medidas de protección de los niños. Cabe señalar que parte del Convenio se solapa con los temas cubiertos por el Reglamento de Bruselas II bis y, por lo tanto, entre los Estados miembros de la UE este reglamento tiene prioridad sobre el Convenio de La Haya de 1996 en los casos intracomunitarios (artículo 61 del Reglamento de Bruselas II bis). Sin embargo, el Convenio sigue siendo aplicable en las cuestiones sobre las que el Reglamento no dice nada.

Una cuestión en la que el Convenio de La Haya de 1996 complementa las disposiciones del Reglamento de Bruselas II bis es la relativa a la ley aplicable. A este respecto, según el artículo 15 del Convenio de La Haya de 1996, la aplicación de la *lex fori* es la norma general, que vincula claramente la competencia y la ley aplicable. Establecer la

31 Case C-435/06, C, ECLI:EU:C:2007:714. On contents of parental responsibility see also D. DANIELI, ‘Parental Responsibility’ in I. VIARENGO, F.C. VILLATA, Planning the Future of Cross Border Families: a path through coordination, Publishing OxHartford, 2020.

32 Para un amplio análisis de las normas jurisdiccionales, véase A. LIMANTE, I. KUNDA, ‘Jurisdiction in Parental Responsibility Matters’ in C. HONORATI (ed.), *Jurisdiction in Matrimonial Matters, Parental Responsibility and International Abduction. A Handbook on the Application of Brussels IIa Regulation in National Courts*, Peter Lang, 2017.

33 Hay que hacer una breve nota sobre el artículo 10 que se refiere a la competencia en casos de sustracción de menores y que en general establece que cualquier acto unilateral de sustracción de un menor no afecta a la competencia en casos de responsabilidad parental. Sólo en condiciones muy estrictas, establecidas en las letras a) y b) del artículo 10, puede atribuirse la competencia a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro al que el niño ha sido sustraído. Recientemente, el TJUE se ha pronunciado sobre el efecto de esta disposición en lo que respecta a los alimentos para los niños, revelando así las relaciones cruzadas entre los instrumentos de la UE. El TJUE dictaminó que el artículo 10 del Reglamento Bruselas II bis y el artículo 3 del Reglamento sobre alimentos, deben interpretarse en el sentido de que, en el caso de que un niño que tenía su residencia habitual en un Estado miembro haya sido trasladado indebidamente por uno de los progenitores a otro Estado miembro, los tribunales de ese otro Estado miembro no son competentes para pronunciarse sobre una demanda relativa a la custodia o a la fijación de una pensión alimenticia con respecto a ese niño, a falta de indicios de que el otro progenitor haya consentido su traslado o no haya presentado una demanda de restitución de ese niño. Case C85/18, *CV v DU*, ECLI:EU:C:2018:220

competencia para las responsabilidades parentales en un determinado Estado en virtud del Reglamento Bruselas II bis significa, en última instancia, que se aplicará la ley de ese mismo Estado.

4.3. Convenio de La Haya de 1980 sobre la sustracción de menores

Como se desprende de su nombre, el Convenio de La Haya de 1980 se centra por completo en la sustracción parental de menores. El objetivo general del Convenio de La Haya de 1980 sobre Sustracción de Menores es restablecer el statu quo mediante la pronta restitución de los menores trasladados o retenidos ilícitamente a través de un sistema de cooperación entre las autoridades centrales designadas por sus Partes Contratantes.

Al igual que el Convenio de La Haya de 1996, el Convenio de La Haya de 1980 complementa el Reglamento de Bruselas II bis. Las normas del Reglamento de Bruselas II bis tienen prioridad sobre las normas del Convenio de La Haya de 1980 en las relaciones entre los Estados miembros en todas las cuestiones cubiertas por el Reglamento (véase el artículo 60 del Reglamento de Bruselas II bis). Sin embargo, para las cuestiones no contempladas en el Reglamento, éste remite directamente al Convenio de La Haya de 1980. En particular, el Convenio de La Haya de 1980 se aplica junto con el artículo 11 del Reglamento de Bruselas II bis.³⁴ Como la sustracción de menores por parte de los padres no se tratará en este volumen, este instrumento no se analizará más a fondo.

V. REGULACIÓN DE LOS ASPECTOS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS

Al igual que en los ámbitos anteriores, la competencia en materia de alimentos y la ley aplicable se regulan en instrumentos distintos. Las normas de competencia se establecen en el Reglamento sobre alimentos, mientras que la ley aplicable a los casos de alimentos se regula en el Protocolo de La Haya sobre alimentos de 2007, que fue aprobado por la UE³⁵ y al que se remite directamente el artículo 15 del Reglamento sobre alimentos.

Además, el Convenio de La Haya de 2007 sobre alimentos para niños cubre algunas cuestiones no contempladas en el Reglamento sobre alimentos. El Reglamento de Pensiones Alimenticias incluye enlaces a este instrumento en varios casos.

34 Sobre la regulación de la sustracción parental de menores en la UE, véase C. HONORATI, A. LIMANTE, 'Jurisdiction in cases of child abduction. Proceedings for the return of the child' in C. HONORATI (ed.), *Jurisdiction in Matrimonial Matters, Parental Responsibility and International Abduction. A Handbook on the Application of Brussels IIa Regulation in National Courts*, Peter Lang, 2017.

35 2009/941/EC: Council Decision of 30 November 2009 on the conclusion by the European Community of the Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations [2009] OJ L 331.

Obligaciones alimenticias			
Instrumento de Derecho internacional privado de familia	Cuestiones tratadas	Ámbito temporal de aplicación	Ámbito geográfico de aplicación
Reglamento de alimentos /instrumento de la UE	Jurisdicción Ley aplicable (sólo referencia al Protocolo de La Haya sobre alimentos de 2007) Reconocimiento y ejecución Cooperación	A partir del 18 de junio de 2011	Todos los Estados miembros de la UE, excepto Dinamarca ³⁶
Convenio de La Haya de 2007 sobre alimentos para niños / adoptado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado	Cooperación de las autoridades centrales Reconocimiento y ejecución aplicación	Se aplica en la UE desde el 1 de agosto de 2014	Todos los Estados miembros de la UE, excepto Dinamarca
Protocolo de La Haya sobre alimentos de 2007 / adoptado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado	Derecho aplicable	Aplicado en la UE desde el 18 de junio de 2011	Todos los Estados miembros de la UE, excepto Dinamarca

5.1. Reglamento de alimentos

El Reglamento sobre alimentos establece las normas que rigen la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las órdenes de alimentos en los Estados miembros de la UE. También incluye un capítulo relativo a la ley aplicable, sin embargo, ese capítulo sólo consta de un artículo (el artículo 15) que establece que la ley aplicable a las obligaciones de alimentos se determinará de conformidad con el Protocolo de La Haya sobre alimentos de 2007 en los Estados miembros vinculados por ese instrumento. El Reglamento de Pensiones Alimenticias abarca tanto las pensiones alimenticias de los hijos como las del cónyuge, así como otras obligaciones alimenticias derivadas del parentesco, la filiación, el matrimonio o la afinidad (artículo 1).

36 Sólo una parte de las disposiciones del Reglamento sobre alimentos se aplica entre los países de la UE y Dinamarca. Véase: Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [2009] OJ L 149.

En general, las normas jurisdiccionales (artículo 3) están concebidas para preservar los intereses del acreedor de alimentos, que se considera una parte más débil. Por lo tanto, el Reglamento prevé una serie de bases jurisdiccionales diferentes para las demandas de alimentos y ofrece al acreedor la posibilidad de elegir el foro entre todas las opciones posibles. En el caso de las pensiones alimenticias para adultos, también se prevé la posibilidad de elegir el foro, aunque no es una elección totalmente libre, ya que, al igual que otros instrumentos de la UE, la lista del reglamento exige factores de conexión (artículo 4).

El Reglamento sobre alimentos también vincula las demandas de alimentos con las de responsabilidad parental. El acreedor puede elegir el tribunal que, según su propia ley, es competente para conocer de un procedimiento relativo al estado de una persona (por ejemplo: establecimiento de la filiación) o a la responsabilidad parental cuando dicha demanda de alimentos es accesoria a un procedimiento relativo al estado de la persona o a la responsabilidad parental (puede hacerse una excepción cuando la competencia se basa únicamente en la nacionalidad de una de las partes).³⁷

5.2. Convenio de La Haya sobre alimentos para niños de 2007

El Convenio de La Haya de 2007 sobre Pensiones Alimenticias y el Reglamento sobre Pensiones Alimenticias se negociaron simultáneamente, y la UE buscó la coherencia entre ambos instrumentos. El Convenio de La Haya de 2007 fue aprobado por la UE.³⁸ Se aplica a los casos transfronterizos que implican a un Estado miembro de la UE y a un tercer país que es un Estado contratante del convenio. Además, abarca ciertas cuestiones que no se desarrollaron en el Reglamento sobre alimentos (por ejemplo, la asistencia jurídica gratuita en todos los casos de alimentos para niños o las amplias obligaciones de las Autoridades Centrales). En comparación con el Reglamento sobre alimentos, el ámbito de aplicación material del Convenio de La Haya de 2007 sobre alimentos para niños es más reducido, ya que se aplica a los alimentos para niños y para el cónyuge y sólo en casos excepcionales abarca las demás formas de alimentos.

5.3. Protocolo de alimentos de La Haya de 2007

La ley aplicable a los casos de pensión alimenticia está regulada por el Protocolo de La Haya sobre Pensiones Alimenticias de 2007³⁹, aprobado por la UE.⁴⁰ Al igual que el Reglamento sobre Pensiones Alimenticias, el Protocolo de La Haya sobre Pensiones Alimenticias de 2007 tiene un amplio ámbito de aplicación material, ya que se aplica a las obligaciones alimenticias derivadas de una relación familiar, de parentesco, de matrimonio o de afinidad, incluida la obligación alimenticia con respecto a un niño, independien-

37 De conformidad con la letra d) del artículo 3 del Reglamento sobre alimentos, el órgano jurisdiccional competente en materia de responsabilidad parental será también competente, en principio, para conocer de una solicitud de alimentos accesoria al procedimiento de responsabilidad parental pendiente ante él.

38 Council Decision of 9 June 2011 on the approval, on behalf of the European Union, of the Hague Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance [2011] OJ L 192.

39 Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations.

40 Council Decision 2009/941/EC of 30 November 2009 on the conclusion by the European Community of the Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations [2009] OJ L 331.

temente del estado civil de los padres (artículo 1). El protocolo se centra por completo en las cuestiones de ley aplicable. La norma general sobre la ley aplicable establece que las obligaciones de alimentos se rigen por la ley del Estado de la residencia habitual del acreedor (artículo 3). Además, se establecen ciertas normas que favorecen la situación del acreedor (artículo 4).

Las normas de la ley aplicable del Protocolo de La Haya sobre alimentos de 2007 son de aplicación universal. En particular, el protocolo se aplica incluso si la ley aplicable es la de un Estado no contratante (artículo 2).⁴¹

VI. REGULACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL Y EFECTOS PATRIMONIALES DE LAS UNIONES REGISTRADAS

El Reglamento sobre el régimen económico matrimonial y su hermano gemelo, el Reglamento sobre las consecuencias patrimoniales de las uniones registradas, son instrumentos relativamente nuevos, ya que no han entrado en vigor hasta el 29 de enero de 2019. Son las piezas más recientes del rompecabezas del Derecho de familia internacional privado de la UE. Al igual que el Reglamento Roma III, los Reglamentos gemelos se adoptaron a través del mecanismo de cooperación reforzada y, por tanto, solo se aplican en los Estados miembros de la UE que se han adherido a estos instrumentos.⁴²

Bienes matrimoniales y bienes de las parejas de hecho registradas			
Instrumento de Derecho internacional privado de familia	Cuestiones tratadas	Ámbito temporal de aplicación	Ámbito geográfico de aplicación
Reglamento sobre los bienes matrimoniales /Instrumento de la UE	Jurisdicción Derecho aplicable Reconocimiento Ejecución Cooperación reforzada	Aplicable a partir del 29 de enero de 2019	Cooperación reforzada 18 Estados miembros
Reglamento sobre las consecuencias patrimoniales de las uniones registradas /Instrumento de la UE	Jurisdicción Derecho aplicable Reconocimiento Ejecución Cooperación reforzada	Aplicable a partir del 29 de enero de 2019	Cooperación reforzada 18 Estados miembros

41 Véase también M. ŽUPAN, M. DRVENTIĆ, 'Maintenance' in I. VIARENGO, F.C. VILLATA, Planning the Future of Cross Border Families: a path through coordination, Hart Publishing, Oxford 2020.

42 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, República Checa y Suecia.

6.1. Reglamento sobre el régimen económico matrimonial

El Reglamento sobre el régimen económico matrimonial, junto con el Reglamento sobre las consecuencias patrimoniales de las uniones registradas, que se analizan extensamente en este libro, fueron los bloques de construcción largamente esperados en el sistema de instrumentos de la UE que regulan las parejas transfronterizas. Dado que el régimen económico matrimonial es de gran relevancia en caso de separación de la pareja, existía una clara demanda de normas europeas en esta materia.

El Reglamento sobre el régimen económico matrimonial establece normas sobre qué tribunal debe ser competente para tratar las cuestiones patrimoniales, qué ley debe aplicarse y proporciona un mecanismo para el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en toda la UE. Cabe señalar que, al igual que otros instrumentos de la UE, el Reglamento no define el “matrimonio”. El considerando 21 del Reglamento sobre el patrimonio matrimonial establece que este reglamento no debe aplicarse a otras cuestiones preliminares como la existencia, la validez o el reconocimiento de un matrimonio, que siguen estando cubiertas por el derecho nacional de los Estados miembros, incluidas sus normas de derecho internacional privado. La preservación de los conceptos nacionales de “matrimonio” se garantiza además en el artículo 9 del Reglamento sobre el régimen económico matrimonial, que permite al tribunal declinar su competencia en materia de propiedad matrimonial si el país del tribunal no reconoce determinados matrimonios a efectos de los procedimientos de régimen económico matrimonial.

El Reglamento sobre el régimen económico matrimonial está fuertemente interrelacionado con el Reglamento Bruselas II bis y el Reglamento sobre sucesiones en lo que respecta a las normas jurisdiccionales (el Reglamento sobre el régimen económico matrimonial pretende concentrar la jurisdicción sobre el régimen económico matrimonial en el Estado miembro cuyos tribunales están tramitando la sucesión de un cónyuge o el divorcio, la separación legal o la anulación del matrimonio⁴³). En cuanto a la ley aplicable, el Reglamento establece normas muy claras que pretenden garantizar la claridad y la previsibilidad jurídica.

6.2. Reglamento sobre los efectos patrimoniales de las uniones registradas

Mientras que el Reglamento sobre el régimen económico matrimonial pretende aclarar los derechos patrimoniales de las parejas casadas internacionales, el Reglamento sobre las consecuencias patrimoniales de las uniones registradas se centra únicamente en las uniones registradas. Sin embargo, en cuanto a su contenido, ambos reglamentos son muy parecidos. El Reglamento sobre las consecuencias patrimoniales de las uniones registradas es sustancialmente idéntico a su gemelo, el Reglamento sobre el patrimonio matrimonial. La mayoría de las normas son idénticas o con algunos pequeños cambios necesarios debido a un tipo de relación diferente. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, estos dos reglamentos se discuten juntos en la literatura académica. En este volumen se adoptará el mismo enfoque, salvo en los casos en que sea necesario subrayar las diferencias entre ambos instrumentos.

⁴³ Véase el capítulo 4 a este respecto.

VII. ESTUDIO DE CASO: INTERACCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

Como se ha señalado anteriormente, en un caso transfronterizo puede ser necesario aplicar una serie de instrumentos que se han comentado anteriormente. Para ejemplificar esto, consideremos el siguiente caso práctico:

En 2015, Romeo (de nacionalidad italiana) conoció a Julija (de nacionalidad eslovena) en Verona, Italia, donde ambos estudiaban Administración de Empresas. Se casaron en 2017 en París (Francia) y pronto se trasladaron a vivir a España, donde a Julija le ofrecieron un puesto decente en una entidad financiera. Romeo buscaba empleo en España, pero sin éxito. Más tarde comenzó a trabajar en línea traduciendo documentos para una empresa italiana. En 2019 nació su hijo William. Como Julija se fue de baja por maternidad, la pareja se trasladó a Bruselas para probar suerte allí. En ese momento, Romeo iba a la oficina y Julija se quedaba en casa con el bebé. Al cabo de un año, a Julija le ofrecieron un prometedor puesto en Eslovenia y decidió trasladarse, llevándose a William con ella. Ella esperaba que Romeo se uniera, sin embargo, Romeo dejó muy claro que no estaba dispuesto a mudarse y se quedó en Bruselas. En 2021, tras más de medio año viviendo separados, la pareja decidió divorciarse.

En tal situación, un abogado al que se dirija uno de los cónyuges, o un tribunal que haya recibido la demanda en la que uno de los cónyuges solicita resolver las cuestiones de divorcio, responsabilidades parentales, alimentos y bienes matrimoniales, tendría que analizar una serie de leyes jurisdiccionales y aplicables. En particular, primero tendría que especificar qué instrumentos legales serían aplicables para establecer la jurisdicción para la disolución de los vínculos matrimoniales, las responsabilidades parentales, los alimentos y la división de los bienes matrimoniales. A continuación, habría que realizar el mismo ejercicio para definir la ley aplicable. Las principales consideraciones de este análisis se resumen en el siguiente cuadro:

¿Hay algún elemento transfronterizo que requiera el uso de instrumentos de la UE?	Sí, ambos cónyuges son de diferentes nacionalidades; vivieron en varios países a lo largo de su matrimonio.
Instrumento jurídico que establece las normas jurisdiccionales para la disolución del vínculo matrimonial	Reglamento Bruselas II bis. Corresponde al demandante elegir cuál de las jurisdicciones disponibles enumeradas en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento Bruselas II bis es preferible para iniciar un caso de disolución del matrimonio.
Instrumento jurídico que establece la ley aplicable a la disolución de los vínculos matrimoniales	Reglamento Roma III. En virtud del artículo 5 del Reglamento Roma III, las partes pueden elegir la ley aplicable a su divorcio entre cuatro opciones posibles. En ausencia de elección de las partes, se aplica el artículo 8.

Continúa página siguiente

Instrumento jurídico que establece las normas jurisdiccionales de las responsabilidades parentales	Reglamento Bruselas II bis. El artículo 8 establece la norma general de competencia. Además, los artículos 9, 13 y 14 pueden ser relevantes en casos más específicos. El artículo 12 del Reglamento de Bruselas II bis también permite (aunque de forma limitada) la elección del tribunal. En caso de sustracción de menores, entra en juego el artículo 10, que se aplica junto con el Convenio de La Haya de 1980 sobre sustracción de menores.
Instrumento jurídico que establece la ley aplicable a las responsabilidades parentales	Convenio de La Haya de 1996. En virtud del artículo 15, la aplicación de la <i>lex fori</i> es la norma general.
Instrumento jurídico que establece las normas jurisdiccionales para las demandas de alimentos (alimentos para los hijos y para el cónyuge)	El Reglamento de Pensiones Alimenticias enumera las posibles jurisdicciones. Además, es posible la elección del tribunal para los alimentos para adultos.
Instrumento jurídico que establece la ley aplicable a los alimentos	Protocolo de La Haya sobre alimentos de 2007. Los artículos 3 y 4 son relevantes.
Instrumento jurídico por el que se establecen las normas de competencia para los bienes matrimoniales	Regulación de los bienes matrimoniales. Los artículos 4 a 6 establecen las normas principales. El artículo 7 prevé una elección limitada de normas judiciales.
Instrumento jurídico que establece la ley aplicable a los bienes matrimoniales	Reglamento de régimen económico matrimonial. El artículo 22 prevé la elección de las partes como principal factor de conexión. Si las partes no han elegido la ley aplicable, se aplica el artículo 26.

Cabe señalar que todos los Estados miembros mencionados en el estudio de caso (Italia, Eslovenia, Bélgica y España) participan en los instrumentos de cooperación reforzada (el Reglamento Roma III y el Reglamento sobre el patrimonio matrimonial). Por lo tanto, están obligados a cumplir todos los reglamentos mencionados.

Suponiendo que Julija inicie el proceso de divorcio en Eslovenia, el tribunal tendría que confirmar primero su competencia refiriéndose al artículo 3(1)(a) ídem 6 del Reglamento Bruselas II bis (la demandante tiene residencia habitual en Eslovenia durante al menos 6 meses y es nacional de este país). La ley aplicable a la disolución de los vínculos matrimoniales debe establecerse en virtud del artículo 8 del Reglamento Roma III (si no hay acuerdo sobre la elección de la ley). Si la solicitud de divorcio se presenta menos de un año después de que Julija regrese a Eslovenia, lo más probable es que se establezca la ley belga como ley aplicable (artículo 8(b)). Si la solicitud se presenta más tarde, se aplica la *lex fori* (artículo 8(d)).

Para determinar si es competente en materia de responsabilidad parental, el tribunal debe consultar de nuevo el Reglamento Bruselas II bis, y si el tribunal está de acuerdo en que el hijo de la pareja tiene su residencia habitual en Eslovenia, se declarará competente en virtud del artículo 8. La ley aplicable es la *lex fori* según el artículo 15 del Convenio de La Haya de 1996.

La competencia en materia de alimentos debe establecerse con arreglo al Reglamento sobre alimentos. Su artículo 3 permite a Julija iniciar el caso en Eslovenia (si se considera que ella y su hijo tienen allí su residencia habitual) o en Bélgica (residencia habitual del demandado).⁴⁴ La ley aplicable es la eslovena en virtud del artículo 4 del Protocolo de La Haya de 2007 sobre el mantenimiento (residencia habitual del acreedor).

Por último, el juez esloveno también tiene que abrir el Reglamento de régimen económico matrimonial para determinar si es competente o no en virtud del artículo 5, ya que la competencia para decidir sobre el régimen económico matrimonial sigue a la competencia para el divorcio. En cuanto a la ley aplicable, en virtud del artículo 69 del Reglamento de régimen económico matrimonial, las normas sobre la ley aplicable establecidas en este instrumento se aplican únicamente a los cónyuges que se casan o especifican la ley aplicable al régimen económico matrimonial después del 29 de enero de 2019. Por lo tanto, si los cónyuges no han concluido un acuerdo de elección de ley después de esta fecha, debe consultarse la ley nacional eslovena.

Lo que se puede presenciar, es que para un caso muy típico de divorcio, puede ser necesario consultar todos los instrumentos internacionales de derecho de familia privados por la UE. Desde un punto de vista, se trata de un conjunto complejo de instrumentos y su aplicación es una tarea difícil. Esto es particularmente cierto si se ve desde la posición de un juez nacional que está acostumbrado a tratar el divorcio como una cuestión (las responsabilidades parentales, los alimentos y los bienes matrimoniales son elementos del divorcio) y a aplicar las leyes nacionales. También hay que tener en cuenta que, aunque entran en juego muchos instrumentos, el conjunto es el mismo si el caso se inicia en Eslovenia, Bélgica, Italia o España. Esto da claridad a las partes, ya que consultar las normas nacionales de conflicto de leyes, especialmente para quienes no son nacionales de ese Estado, es aún más complicado.

VIII. OBSERVACIONES FINALES

En 2011, el prof. González Beilfuss señaló que si un observador externo observara el desarrollo del Derecho internacional privado en Europa durante la última década, seguramente se sorprendería de la cantidad de nueva legislación de la UE que ya se ha aprobado o que se está preparando.⁴⁵ También subrayó la velocidad de desarrollo y los progresos realizados en el ámbito de la unificación del derecho de familia en Europa.

44 El TJUE se ha pronunciado sobre la relación entre el divorcio, las responsabilidades parentales y los casos de manutención de los hijos al interpretar el artículo 3, letra c), y el artículo 3, letra d), del Reglamento sobre alimentos (créditos accesorios) en los asuntos C-184/14, *A v B*, ECLI:EU:C:2015:479 y C-468/18, *R v P*, ECLI:EU:C:2019:666.

45 CH. GONZÁLEZ BEILFUSS, 'The Unification of Private International Law in Europe: A Success Story?' in K. BOELE-WOELKI, J.K. MILES, J.M. SCHERPE (eds.), *The Future of Family Property in Europe*, Intersentia, 2011, pp. 329-340.

Diez años después, sus observaciones son igualmente correctas. De hecho, es fascinante lo mucho que se ha conseguido en el ámbito del Derecho internacional privado de la familia. En el año 2000, el Reglamento Bruselas II inició la era del Derecho internacional privado europeo, y fue revisado por el Reglamento Bruselas II bis en 2003. Después siguieron el Reglamento sobre alimentos, el Reglamento Roma III y, más recientemente, el Reglamento sobre los bienes matrimoniales y el Reglamento sobre las consecuencias patrimoniales de las uniones registradas, con referencias cruzadas a los instrumentos desarrollados por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Además, en 2019 se aprobó la refundición de Bruselas II bis, que será aplicable a partir de agosto de 2022. El panorama del derecho de familia en Europa ha cambiado considerablemente.

El conjunto de instrumentos de Derecho de familia internacional privado europeo parece cubrir todas las cuestiones importantes que se plantean a las parejas internacionales. Sin embargo, como parte de los instrumentos se adoptaron mediante mecanismos de cooperación reforzada, el nivel de unificación no es el mismo en toda Europa. La revisión de los instrumentos existentes o la adopción de otros nuevos también podría esperarse en el futuro, ya que el derecho de familia en Europa está evolucionando más rápidamente que nunca.